

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO VEINTINUEVE FAMILIA DEL CIRCUITO

Bogotá D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA	ACCIÓN DE TUTELA
RADICACIÓN	Nº. 2022-0576
ACCIONANTE	MIRIAM PRECIADO MONTAÑEZ
ACCIONADO	NUEVA EPS

Procede el despacho a proferir la sentencia que en derecho corresponda para finiquitar el trámite de la ACCIÓN DE TUTELA de la referencia.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO

La señora **MIRIAM PRECIADO MONTAÑEZ**, interpuso acción de tutela por considerar vulnerado los derechos a la vida y la salud, con fundamento en los siguientes:

HECHOS:

Señala la accionante tener diagnostico de HIPERCALCEMIA, que el día 8 de junio del año en curso en la Clínica la Colina le realizaron la primera cirugía, intervenciones que consistieron en el vaciamiento linfático radical o radical modificado de cuello unilateral vía abierta, tiroidectomía parcial vía abierta, paratiroidectomía parcial vía abierta y parte del tejido extraído se envió a patología con el hallazgo de carcinoma papilar de tiroides de variante folicular infiltrativa; el día 14 de julio del año en curso en la misma Clínica la Colina le realizaron una segunda cirugía que consistió en colgajo local de piel compuesto de vecindad entre cinco a diez centímetros cuadrados, tiroidectomía parcial vía abierta y vaciamiento linfático radical o radical modificado de cuello unilateral vía abierta; el día 17 de julio del año en curso, asistió a la clínica la colina por urgencias, el día 18 de julio fui subida a la UCI, debido a la baja de calcio, le iniciaron tratamiento oral con calcio y con calcio intravenoso y con este tratamiento le estabilizaron el calcio; Una vez en piso me suspendieron el calcio intravenoso porque no le podrían dar salida, con este calcio intravenoso; y empezaron un tratamiento únicamente con calcio oral y los niveles de calcio empezaron a bajar. Bajo la dirección del médico el 31 de julio le iniciaron un tratamiento con dos inyecciones diarias (cada 12 horas), inyecciones que los profesionales tratantes consiguieron una muestra, producto de esto inmediatamente el calcio le empezó a subir hasta llegar al límite permitido y que la vida de la accionante no corriera peligro, siendo exitosa su aplicación en su organismo y los resultados fueron rápidos.

El día lunes 1 de agosto, el profesional tratante le entrega a la accionante documentación con la respectiva justificación ante la Nueva EPS para tramitar la entrega de este medicamento básico para controlar los niveles de calcio y de esta manera dar de alta a la accionante, el día 3 de agosto la clínica le obsequió las inyecciones faltantes de TERIPAREATIDA, que máximo son de cuatro a cinco, mientras la EPS le aprobaba las inyecciones solicitadas (dos por mes).

Indica el accionante que el 1 de agosto se radicó la documentación a la EPS, solicitando el medicamento y el día 5 de agosto realizó llamada a la EPS para saber si podía recoger el medicamento y le contestaron que no había sido autorizado y la accionante solicito que le enviaran la respuesta por correo electrónico y les informaron que no podía, pero se le realizo lectura en la que se le indicó que era un servicio de tecnología que no tiene evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica, sin embargo indica la accionante que el medicamento se encuentra acreditado por el INVIMA con el numero 2014M-0003264-

R1, e indica al despacho que en el caso de deber comprar el medicamento la EPS que, le devuelva el dinero, ya que es un medicamento bastante costoso.

## **PRETENSIONES**

Por lo tanto, acude la accionante al aparato judicial para que se le tutelen sus derechos fundamentales vulnerados y ordenar a la entidad accionada NUEVA EPS que autorice de manera pronta y asertiva que le de el medicamento TERIPARATIDE solución inyectable 250MCG/ML pluma pen x 2,4ML (Forteo Solución Inyectable), se conmine a la entidad prestadora de salud NUEVA EPS, a no seguir exigiendo tramites innecesarios para suministrarme el medicamento correspondiente y de igual forma que a futuro cumpla con la obligación de suministrarme el medicamento.

## **REGLAS DE COMPETENCIA**

Este despacho es competente para conocer del asunto, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y con los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, lo que indica que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública e incluso de particulares.

## **ADMISIÓN Y LITIS**

La presente acción de Tutela fue admitida mediante auto del ocho (08) de agosto de dos mil veintidós (2022), y se ordenó vincular a la Clínica Colina y oficiar a las partes accionada y vinculada para que contesten la acción y aporte las pruebas que pretendan hacer valer.

## **CONSIDERACIONES**

### **PROBLEMA JURÍDICO**

Corresponde al Juez de tutela, determinar si a la señora MIRIAM PRECIADO MONTAÑEZ, se le está vulnerando sus derechos a la salud y a la vida.

### **IDENTIFICACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL INVOLUCRADO**

#### **DERECHO A LA VIDA:**

El artículo 11 de la Constitución Nacional consagra como fundamental el derecho a **LA VIDA**; en dicho sentido señala: **“El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”**.

Sobre ese mismo derecho, la **H. Corte Constitucional**, en Sent. T-370 de 1998, Magistrado **ALFREDO BELTRÁN SIERRA**, expuso:

“La protección y conservación del derecho a la vida escapa a cualquier discusión de carácter legal o contractual. No es aceptable que en un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana (artículo 1 de la Constitución), y en la conservación del valor de la vida (Preámbulo y artículo 11 de la Constitución), se pueda tolerar que ante el apremio de un individuo de recibir un tratamiento médico para conservar su existencia, se antepongan intereses de carácter económico, o una disposición de carácter legal, tal como sucedió en el caso de la señora .....,

que ante la falta de recursos para cubrir el porcentaje que por disposición legal estaba obligado a aportar, no se le suministró el tratamiento requerido .....

## **DERECHO A LA SALUD**

Está ligado al derecho a la **VIDA**, cuando éste se compromete con la trasgresión de aquel.

Respecto de ese tema, la H. Corte Constitucional expresó:

*"(...) el derecho a la Salud y a la integridad física emergen como fundamentales cuando su amenaza o vulneración representan peligro o daño al derecho fundamental a la vida, de manera que será necesario protegerlo dado el caso" (Sentencias T-140, T-192 y T-531 de 1994).*

Mucho más ha de exigirse respecto al derecho a la Salud al Estado, pues aquél fue consagrado a cargo de este como un servicio público, el cual comporta garantizar **"a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud", correspondiéndole al ente estatal "organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes..."** (Art. 49 de la C.N.).

Por eso, **"Las entidades públicas y privadas prestadoras de servicios asistenciales de salud y de seguridad social, deben, directamente o mediante un tercero, suministrar la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y demás servicios indispensables en los lugares y condiciones que exija el caso concreto de cada paciente, teniendo muy en cuenta su estado de gravedad; en pocas palabras, el Estado es responsable de garantizar que las entidades de previsión social estén dispuestas en todo momento a brindar atención oportuna y eficaz a sus usuarios"** (Sentencia T-531 de 1994, M. P. Dr. FABIO MORON DIAZ).

El derecho a la **SALUD**, implica vivir de una forma digna, plena, con salud corporal. En relación con este punto, la **H. Corte Constitucional**, en Sentencia T-123 DE Marzo 14 de 1994, expresó:

*"El derecho a la vida comporta como extensión el derecho a la integridad física y moral, así como el derecho a la salud. No se puede establecer una línea divisoria entre los tres derechos, porque tienen una conexión íntima, esencial y, por ende, necesaria. El derecho a la salud y el derecho a la integridad física y moral, se fundamentan en el derecho a la vida, el cual tiene su desarrollo inmediato en aquellos. Sería absurdo reconocer el derecho a la vida, y al mismo tiempo, desvincularlo de los derechos consecuenciales a la integridad física y a la salud. Desde luego, es factible establecer entre los tres derechos una diferencia de razón con fundamento en el objeto jurídico protegido de manera inmediata; así, el derecho a la vida protege de manera próxima el acto de vivir. La integridad física y moral, la plenitud y totalidad de la armonía corporal y espiritual del hombre, y el derecho a la salud, el normal funcionamiento orgánico del cuerpo, así como el adecuado ejercicio de las facultades intelectuales.*

*(.....) El tratadista Javier Hervada, complementa lo expuesto con el siguiente comentario:*

*Es el derecho del hombre a mantener y conservar del mejor modo posible su existencia humana, su vida plena, su salud corporal, su ser de hombre, que es el requisito indispensable para poder llegar a ser lo que está llamado a ser. Y es que el ser no existente no puede realizar función alguna; el ser mermado en sus facultades sólo puede ejercer sus funciones imperfectamente; sólo el ser sano puede cumplir a cabalidad su destino. El derecho a la vida, por tanto, se desglosa, a su vez, en una serie de derechos más concretos: el derecho a la vida saludable e íntegra se mantiene en pie en cualesquiera circunstancias."*

### **El caso en concreto.**

Así las cosas, procede esta Juez Constitucional al estudio en sede de tutela, indicando que el aquí peticionario invoca como derechos supuestamente vulnerados por la entidad accionada a la salud, vida digna, seguridad social y a la vida.

Haciendo alusión a la accionada NUEVA EPS, indicó que una vez revisada la base de afiliados de Nueva EPS, se evidencia que MIRIAM PRECIADO MONTAÑEZ CC 46.356.257, se encuentra en estado ACTIVO al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de Nueva EPS en el RÉGIMEN CONTRIBUTIVO...**NUEVA EPS** no ha vulnerado los derechos constitucionales de carácter fundamental del accionante, ni ha incurrido en una acción u omisión que ponga en peligro, amenace o menoscabe sus derechos. Todo lo contrario, se ha ceñido en todo momento a la normatividad aplicable en materia de Seguridad Social en Salud. Debido a ello, habida cuenta que no existe vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, que fuese atribuible a NUEVA EPS, la solicitud de tutela de la referencia carece de objeto. Prueba de lo anterior, es la ausencia en el expediente de cartas de negación de servicios de salud emitidas por parte de NUEVA EPS, todo lo contrario, se le ha autorizado los servicios en la red de prestadores de servicios de salud que la EPS tiene contratada” y expone la política de manejo relacionada con el insumo de medicamentos, e indica que “los servicios que son ordenados al usuario por parte de los Médicos de la Red de Nueva EPS son cubiertos con base a lo permitido por las normas habilitantes, así, en sentencia T-760 de 2008, respecto a los requisitos del tratamiento integral indica: “Tales decisiones proceden cuando (i) la falta del servicio o medicina solicitada ponga en riesgo los derechos a la vida e integridad del paciente (...) sea porque amenaza su supervivencia o afecta su dignidad; (ii) el servicio o medicina no pueda ser sustituido por otro que sí está incluido dentro del POS bajo las mismas condiciones de calidad y efectividad; (iii) el servicio o medicina haya sido ordenado por un médico adscrito a la EPS en la que está inscrito el paciente; y, (iv) la capacidad económica del paciente, le impida pagar por el servicio o medicina solicitado” Es así, que, frente al tratamiento integral, el juez constitucional debe verificar que, en efecto, una solicitud de este tipo tenga sustento en los presupuestos fácticos y que esté involucrada la responsabilidad de la accionada. Las órdenes dirigidas a las entidades deben corresponder a sus acciones u omisiones, pero en el caso de la referencia no se precisa cuál es la conducta de la EPS que se reprocha. **El requerimiento de la parte accionante, sus razones y las explicaciones, giraron en torno a la dificultad de sufragar el costo de sus desplazamientos, no en una ausencia de tratamiento**”; sin embargo, encuentra el Despacho que la accionante allega formula médica del profesional tratante y audio de comunicación establecida con la entidad accionada Nueva EPS, en la que la funcionaria de la mencionada entidad le informa “...aparece devuelta la solicitud, no la aprobaron, dice este servicio o tecnología, no tiene evidencia científica sobre su seguridad y eficacia, medicamento no cuenta con certificación Invima...”, motivo por el cual no le asiste razón a la entidad accionada cuando indica que la presente acción carece de objeto de prueba, que las razones y las explicaciones indicadas por la accionante, giraron en torno a la dificultad de sufragar el costo de sus desplazamientos, no en una ausencia de tratamiento.

Respecto a lo indicado por la funcionaria de la Nueva EPS, en la que indica que la solicitud no cuenta con certificación Invima, encuentra el

*Despacho que la H Corte Constitucional en sentencia T-418/11 ha manifestado:*

*“El INVIMA es la entidad encargada de autorizar la distribución y comercialización de los medicamentos en el país. Pero tal decisión se ha de contrastar y analizar con evidencia científica y médica, aplicada al caso concreto, cuando el médico tratante considere que el estado de salud de una persona requiere un determinado medicamento sin registro INVIMA. Si bien esta entidad es la institución administrativa a la que se le confía la decisión de carácter general acerca de la calidad, seguridad, eficacia y comodidad de todos los medicamentos que puedan ser usados dentro del sistema de salud del país, en materia de la salud de una persona concreta, es el médico tratante la persona a la que se le confía la decisión respecto a cuáles son los servicios de salud que se requiere. Y aunque en principio el médico tratante debe atenerse al momento de recetar a los medicamentos comercializados nacionalmente, puede excepcionalmente recurrir a algunos que aún no hayan sido aprobados, siempre y cuando (i) no exista una alternativa medicinal, sí contemplada y (ii) exista evidencia científica suficiente en la comunidad médica acerca de la calidad, seguridad, eficacia y comodidad del medicamento en cuestión. Es decir, supone la carga de mostrar que el servicio de salud no es experimental, que sí ha sido probado y demostrado, aunque aún no haya sido aprobado formal y legalmente, y que lo requiere la persona a la que se le recetó. Usualmente, muchos de estos medicamentos han surgido en otros países, han sido aprobados por ciertas instituciones de reconocimiento internacional que se usan como referencias globalmente, pero aún no han culminado el proceso formal de aprobación nacional. El dilema constitucional respecto a qué hacer cuando una persona requiere un medicamento no autorizado aún por el INVIMA, como se indicó, ha sido abordado por la jurisprudencia, estableciendo los criterios y parámetros bajo los cuales es posible establecer cuándo es razonable adoptar tal decisión”.*

*“Específicamente, la Sala reitera que (vi) la decisión de un médico tratante de ordenar una droga excluida de los planes de servicios, por considerar que se requiere, prevalece y debe ser respetada, salvo que el Comité Técnico Científico, basado en (1) conceptos médicos de especialistas en el campo en cuestión, y (2) en un conocimiento completo y suficiente del caso específico bajo discusión, considere lo contrario.*

*En tal sentido (vii) Es irrazonable desconocer el concepto del médico tratante únicamente por razones formales [concretamente, porque no está en el plan de servicios o porque su comercialización amplia y general no ha sido autorizada oficialmente aún en el país], especialmente si el médico se fundó en la mejor evidencia científica y médica disponible, aplicada al caso concreto de la persona de que se trate.*

*Adicionalmente, la Sala concluye que (viii) obstaculizar el acceso a los medicamentos que se requieren y han demostrado ser de calidad, seguridad, eficacia y comodidad, es especialmente violatorio del derecho a la salud cuando, además, representan una alternativa significativamente mejor en términos económicos...”.*

*Así mismo el artículo 131 del Decreto-Ley 019 de 2012 dispone:*

*“Las Entidades Promotoras de Salud tendrán la obligación de establecer un procedimiento de suministro de medicamentos cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud a sus afiliados, a través del cual se asegure la entrega completa e inmediata de los mismos.*

*En el evento excepcional en que esta entrega no pueda hacerse completa en el momento que se reclamen los medicamentos, las EPS deberán disponer del mecanismo para que en un lapso no mayor a 48 horas se coordine y garantice su entrega en el lugar de residencia o trabajo si el afiliado así lo autoriza.”*

*De lo expuesto en los anteriores razonamientos jurisprudenciales, y frente al caso puesto a consideración, observa este Despacho que existe orden médica de profesional tratante, adscrito a la EPS y visible a folios 3 del archivo No. 2 y folio 4 del archivo No. 18 y de conformidad con lo previsto en*

la artículo 131 del Decreto-Ley 019 de 2012, son las Entidades Promotoras de Salud (EPS) las encargadas de establecer el procedimiento de suministro de medicamentos cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud a sus afiliados, a través del cual se asegure la entrega completa e inmediata de los mismos y como quiera que existe dilación y/o negación injustificada por parte de la Nueva EPS, para otorgar el suministro de medicamento aquí solicitado por la accionante, en consecuencia una vulneración de derechos a la salud y a la vida por parte de la mencionada entidad. Por lo tanto, este Despacho Judicial, ordenará que la entidad accionada, **NUEVA E.P.S.** en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia entregue a la señora **MIRIAM PRECIADO MONTAÑEZ**, los medicamentos requeridos por la accionante de manera oportuna, eficiente, integral y continua y elimine las barreras que impidan su acceso, conforme a los requerimientos del médico tratante.

Por su parte la entidad vinculada CLINICA COLINA, en su escrito de contestación indica los procedimientos quirúrgicos y de atención brindados a la accionante y precisa que: "...frente a la pretensión invocada por la accionante, mi representada no tiene ninguna injerencia y se escapa por completo de su órbita de control, toda vez que, de acuerdo con la organización del Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS-, quienes tienen la obligación de garantizar la prestación de los servicios de salud, requeridos por los afiliados, son la Entidades Promotoras de Salud –EPS- o el Plan Adicional de Salud -PAS- que haya adquirido la paciente”.

Por lo que, respecto a la entidad vinculada, el Despacho ha de tener en cuenta lo ordenado por el artículo 177 de la ley 100 de 1993, en el que indica que “es la entidad promotora de salud “EPS” la que tiene la función de garantizar y organizar directa o indirectamente la presentación del plan obligatorio de salud, motivo este por el cual este despacho desvinculara a la entidad Clínica Colina.

#### **DECISION:**

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: TUTELAR** los derechos la salud y vida de la señora **MIRIAM PRECIADO MONTAÑEZ**, en contra de la entidad accionada **NUEVA EPS**, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

**SEGUNDO: ORDENAR** que la entidad promotora de salud **NUEVA EPS** haga entrega en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia entregar a la señora **MIRIAM PRECIADO MONTAÑEZ**, los medicamentos requeridos en relación a la patología que motiva esta tutela, de manera oportuna, eficiente, integral y continua, y eliminar las barreras que impidan su acceso, conforme a los requerimientos del médico tratante.

**TERCERO:** Desvincular a la entidad CLINICA COLINA, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**CUARTO:** Por Secretaría, notifíquese el presente fallo en la forma establecida por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1.991, reglamentario de la Acción de Tutela.

**QUINTO: ORDENAR** la REMISIÓN oportuna del expediente a la Honorable Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. OFICIESE.

**COPIÉSE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

**SANDRA MEJÍA MEJÍA.  
JUEZ**

JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

*El anterior auto se notificó por estado No. 87*

*Hoy 23 de agosto de 2022*

CAROLINA SANTAMARÍA LUNA  
Secretaria

Firmado Por:

Sandra Mejia Mejia

Juez Circuito

Juzgado De Circuito

Familia 29 Oral

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b18bd798029e0992b50209c70318ccd192587812162a3062769daefce30af844**

Documento generado en 22/08/2022 11:34:00 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>